

Que el art. 23 no exceptua de ella á reos de asalto en los caminos.

Que la de no establecer tribunales especiales para tales casos, ha podido por lo mismo ser suspensa, y de consiguiente que no procede el amparo en el caso de que se trata, respecto del art. 13 constitucional.

Considerando: Que el delito porque se juzga á Contreras y Casanova, verificado en 21 de Junio de 1873, la justicia ordinaria les inició causa por robo y homicidio, cuya causa se falló en 1ª instancia, y en 2ª el Tribunal considerado como de tal 2ª instancia, se declaró incompetente y consignó los acusados al Gefe político de Acanceh, y después de un año de la aprehension se abrió el juicio contra ellos, por dicho Gefe político, contra el tenor del art. 3º de la misma ley, que dispone que el proceso de los reos de plagio y asalto no aprehendidos *infra-ganti* concluya dentro de quince dias, por lo que no es aplicable al caso la ley citada; y considerando, además: Que el Gefe político de Acanceh ejerce funciones de Gefe político, derivando su autoridad del C. Miguel Castellanos, en calidad de Gobernador del Estado, careciendo de ese carácter, y por lo mismo no ha podido darla á aquel, por lo que ejerciendo aquellas funciones, vulnera, al juzgar á Contreras y á Casanova, la garantía á que se refiere el art. 16 de la Constitución general.

Por lo expuesto, y de conformidad con el art. 101 de la misma Constitución, se decreta:

Que se confirma por sus propios fundamentos la sentencia pronunciada respecto de este juicio, á 5 de Setiembre último, por el Juzgado de Distrito de Yucatán, que declara:

Que la Justicia de la Union ampara y protege á Ignacio Contreras y Leonido Casanova, contra el Gefe político de Acanceh, que sin comprenderles la ley de 2 de Mayo y sin tener autoridad legítima, los juzga conforme á ella, con violacion del art. 16 constitucional.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Ndjera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 18 de Noviembre de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo, por el C. Domingo Pliego, contra el C. Presidente municipal de Pachuca, que ha ordenado al quejoso satisfaga \$ 21 de multa por tener un horno en su casa y que proceda á su demolicion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal que suscribe, alegando en el juicio de amparo promovido por el C. Domingo Pliego contra el C. Presidente municipal de Pachuca, dice: que el acto ó procedimiento que el quejoso ha reclamado y por el que en su concepto se viola la garantía que otorga el art. 4º de la Constitución federal, es el contenido en la orden escrita que acompañó á su primer ocurso, y en la que se le previene que enterara una multa de \$ 25, y procediese á la demolicion de un horno para fabricar pan que tiene en la casa de comercio que gira, y esto por la causal

expresa en dicho Orden, de que por tener el horno en un lugar céntrico de la población, se ha infringido el art. 56 del Reglamento de policía municipal, expedido el 29 de Abril de 1873.

La autoridad responsable, en su informe pretende sostener la legalidad de su Orden alegando como único fundamento el Reglamento citado; pero el quejoso á su vez niega haber infringido esa disposición municipal, porque ésta no comprende en la prohibición que contiene, á los hornos destinados para cocer pan, y porque el quejoso no estableció de nuevo el de que se trata, sino que usa del que ya existía en la casa, cuya circunstancia probó con testigos.

Alega además la razón de que, aunque el Reglamento de policía municipal contuviera la prohibición de tener hornos para pan en el centro de la población, esa prohibición nada valdría en contra del amparo que se solicita, porque ella sería contraria á la libertad del trabajo y de la industria, asegurada en el art. 4º de la Constitución general de la República, supuesto que el ejercicio de la elaboración del pan y la existencia de los hornos en casas particulares como el de que se trata, en nada ofende los derechos de la sociedad para que ese trabajo pueda impedirse gubernativamente, según la escepcion de la parte final del citado art. 4º de la Constitución.

Estas razones del suscrito parecen concluyentes y tienen el convencimiento de que por el Reglamento de policía, por la autoridad no se ha prohibido la existencia de hornos para pan, sino la de aquellos que son nocivos á la salubridad pública, cuya circunstancia con toda evidencia no concurre en los primeros que son tan inofensivos como los que se tienen en las casas para el uso privado de las familias y los que no pueden prohibirse sin cometer la mayor injusticia y sin ejercer la mas odiosa tiranía; y aunque por una de tantas aberraciones, el Reglamento de policía de esta Ciudad hubiese consignado tal prohibición, esta sería inatendible para

TOMO VII.—PARTE II.

la Justicia Federal que tiene la alta misión de proteger al individuo en sus derechos y garantías que la suprema ley del país le asegura contra todo acto, disposición ó ley de cualquiera autoridad que ataque ó vulnere esas mismas garantías.

Por tan obvias razones, la procedencia del amparo en el presente caso parece innegable, y en esa virtud el Promotor pide al Juzgado se sirva fallar declarando: Que la Justicia de la Unión ampara al C. Domingo Pliego contra la Orden reclamada de que se ha hecho mérito, por violar en su persona la garantía de que trata el art. 4º de la Constitución federal.

Pachuca, Setiembre 1º de 1874.—*I. Duran.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Pachuca, Setiembre 3 de 1874.—Resultando de este juicio de amparo que el C. Presidente municipal de esta Ciudad, impuso al C. Domingo Pliego una multa de \$ 25, por tener un horno de pan en su casa de comercio inmediata á la plaza principal, y le exige su demolición dentro del término de 15 días, fojas 1; y

Considerando 1º: que aunque aquella autoridad funda su providencia en el art. 56 del bando de buen Gobierno que dice: queda prohibido establecer en la plaza y en sus primeras calles adyacentes, zahurdas, chacuacos, hornos, etc; los que actualmente existen quedarán clausurados desde el momento en que no pertenezcan á los individuos con cuyos nombres se hubiesen registrado las patentes"; desde luego se advierte que esta disposición no comprende ni podía comprender á los hornos de pan, tan necesarios é inofensivos en toda población y en todas sus calles como en las casas particulares las cocinas y chimeneas que nadie que tenga sentido común, imágnará suprimir á pretexto de proveer á la salubridad pública;

2º: Que en consecuencia, la expresada pro-

videncia contiene una flagrante violacion de las garantías 4ª y 16 constitucionales, tanto porque coarta la libertad de una industria que nada perjudica los derechos de tercero ni ofende los de la sociedad, como por que infiere una molestia en los intereses del quejoso, sin causa legal suficientemente fundada; de conformidad con los arts. 1º fraccion 1ª y 2ª de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

1º: La Justicia de la Union ampara y protege al C. Domingo Pliego contra la determinacion de que se ha quejado; y

2º: No se hace declaracion alguna sobre daños y perjuicios que reclama el quejoso, por no ser necesario, atenta la prevencion del art. 23 de la citada ley.

Hágase saber, sáquense las copias respectivas para el *Semanario Judicial*, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales.

Así definitivamente juzgando, lo sentencié y firmé el C. Lic. Miguel Mejia, Juez de Distrito del Estado de Hidalgo. Doy fé.—*Miguel Mejia.—Francisco Briseño.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 9 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo, por el C. Domingo Pliego, contra el Presidente municipal de Pachuca, que ha ordenado que el quejoso satisfaga \$ 21 de multa, por tener un horno en su casa y que proceda á la demolicion de él, bajo el concepto de que no quedando demolido dentro de quince dias, se procederia por el municipio á que lo quedase á costa del interesado; y

Considerando: Que el art. 4º de la Constitucion general consigna entre las garantías individuales, que todo hombre es libre para abrazar la profesion, industria ó trabajo que le acomode siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos, sin que lo

uno ni lo otro se le pueda impedir, sino por sentencia judicial, cuando ataque los derechos de tercero, ó por resolucion gubernativa dictada en los términos que marco la ley, cuando ofenda los de la sociedad; que el horno de que se trata es para la elaboracion de pan, y esta está protegida por la garantía expresada; y que por lo mismo la Orden del Presidente municipal de Pachuca, vulnera la misma garantía; de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Constitucion general, se decreta:

Que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio á 1º de Setiembre último por el Juez de Distrito de Hidalgo, en la parte que declara que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Domingo Pliego, contra la determinacion de que se ha quejado.

Y por cuanto á que en los juicios de amparo no se debe tomar en consideracion lo relativo á daños y perjuicios, se revoca la propia sentencia, en la parte que declara: que no se hace declaracion sobre daños y perjuicios que reclama el quejoso, por no ser necesario, atenta la prevencion del art. 23 de la ley de 20 Enero de 1869.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José S. Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Ignacio María Altamirano.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José G. Ramírez.—Luis Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 18 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.